

Recurso de nulidad penal Rol I. C. 855-2023.  
C/Fabián Alejandro Pacheco Castro.

Talca, cuatro de agosto de dos mil veintitrés.

**Visto:**

En autos R.I.T. 161-2022, R.U.C. 2000104506-8 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares, por sentencia definitiva de diez de junio de dos mil veintitrés, se condenó a Fabián Alejandro Pacheco Castro a sufrir la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, más una multa de ocho unidades tributarias mensuales, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales del género cannabis, figura prevista y sancionada en el artículo 8 de la ley 20.000, cometido en la comuna de San Javier, el día 27 de enero de 2020. Se concedieron 8 mensualidades para el pago de la multa y se ordenó el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad, con el abono que se indica en el fallo.

En contra de ese fallo, la Defensa del sentenciado dedujo recurso de nulidad basado en las causales de la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal y en subsidio, de la letra b) del artículo 373 del mismo cuerpo legal, fundado en dos motivos diversos.

Se procedió a la vista de la causa, oportunidad en que se escucharon los alegatos del recurrente y del Ministerio Público, fijándose la audiencia del día de hoy para la lectura de este fallo.

**Considerando:**

**Primero:** Que la Defensa de Fabián Alejandro Pacheco Castro dedujo recurso de nulidad contra la sentencia, invocando como **causa principal de nulidad, la del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal**; esto es, cuando en la sentencia se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letra c) del mismo cuerpo legal.

En la sentencia se dio por establecido que su representado mantenía en su domicilio 8 plantas de marihuana en proceso de crecimiento, basándose en el hallazgo que realizó Carabineros, luego de una denuncia anónima y una entrada y registro voluntaria al domicilio, autorizada por su

representado, quien reconoció que era el propietario de las mismas y que las tenía para su consumo personal.

En la audiencia de juicio oral, el acusado declaró que no era efectivo lo declarado a Carabineros, que las plantas no eran suyas, que no sabía de su existencia, agregando que las había reconocido como suyas por proteger a su madre, a fin de que ella no fuera detenida, ya que era la dueña de casa y ese día andaba en Santiago, acompañando a su hermana en unos exámenes médicos.

La lógica dice que lo anterior resulta absolutamente plausible, ya que, si su representado hubiera sabido de la existencia de dichas plantas en un invernadero (en el que no estaban a la vista), dentro de la parcela de propiedad de su madre, no habría autorizado el ingreso voluntario de los policías y habría aprovechado la oportunidad para huir hacia el interior del predio y desaparecer por los terrenos colindantes, por el hecho de que se trata de una persona con antecedentes penales.

A través de la versión del acusado y de las declaraciones de la madre y hermana del acusado, se dejó establecido que todos ellos, además de otro hermano adulto, habitaban el lugar, sin perjuicio que hasta unos dos meses antes del procedimiento policial, también vivía allí una ex pareja de su madre, quien había sido sacado desde el inmueble por Carabineros, cumpliendo una orden judicial de abandono del hogar común.

En consecuencia, una análisis lógico de dichas circunstancias debieron haber llevado al Tribunal a discurrir que era dudosa la propiedad o posesión por parte del acusado de las plantas encontradas, ya que no era posible, más allá de toda duda razonable, imputárselas a él, en desmedro de otros habitantes del mismo inmueble.

Esa causal es de nulidad absoluta y su fin es anular tanto el juicio oral como la sentencia.

**De manera subsidiaria, alegó la causal de nulidad establecida en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto en relación con el artículo 8° de la Ley 2000 y artículo 1° del Reglamento. Tal como se estableció con los protocolos de análisis, las plantas incautadas tenían inflorescencia, ya que aún no daban frutos, pues estaban aún en proceso de crecimiento. En consecuencia, aún no tenían sumidades floridas o cogollos, los que, de acuerdo al Reglamento de la Ley 20.000, son los que producen grave daño a la salud pública, situación que, en la especie no se da.**



De haberse aplicado correctamente la norma del artículo 8º, en relación con las del Reglamento de la Ley 20.000, debió haberse absuelto a su representado, por no existir el elemento típico del delito, cual es el poner en grave peligro la salud pública, bien jurídico protegido por la normativa de la referida.

**En subsidio de las anteriores, interpuso nulidad por la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 8º inciso 2º de la Ley 20000.** Al haberse condenado a su representado a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo y no aplicar la rebaja permitida por el inciso 2º del artículo 8º de la Ley 20.000, se cometió una gran infracción a dicha norma, pues la gravedad del delito fue muy menor, ya que, por un lado, las plantas aún no estaban florecidas, no teniendo, por lo tanto, el componente que produce los daños más graves a la salud pública; por otro lado, no se estableció que alguna de las plantas hayan sido cosechadas, ni siquiera en parte, por lo que no circuló entre las personas, no dañando la salud de nadie.

De no haberse cometido el error en estudio, la pena a aplicar a su representado debió haber sido la de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, pudiendo haber sido beneficiario de la pena sustitutiva de reclusión parcial domiciliaria.

El recurrente pide que el Recurso sea acogido en todas sus partes, disponiendo, de acuerdo a la petición principal la nulidad del juicio oral y de la sentencia, disponiendo la realización de un nuevo juicio oral ante el Tribunal no inhabilitado que corresponda; o, en subsidio, anular solamente la sentencia, dictando una de reemplazo, absolviendo a su representado de los cargos en su contra por no existir el delito que se le ha imputado; y, en subsidio de todo lo anterior, anular solamente la sentencia, dictar una de reemplazo, aplicándole una pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, otorgándole la pena sustitutiva de reclusión parcial domiciliaria.

**Segundo:** Que la casa principal de invalidación señalada en la letra e) del artículo 374 del cuerpo legal precedentemente citado establece que: *“Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados: e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e)...”*

Por su parte, el artículo 342 del mismo Código, en su letra c) señala que: *“Contenido de la sentencia. La sentencia definitiva contendrá: c) La*



*exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297*". A su turno, el artículo 297 ya citado, consagra la libertad del juzgador en la apreciación de la prueba, estableciendo como límites de ella, los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Asimismo, establece la obligación de valorar la totalidad de la prueba, incluso de aquélla que hubiere desestimado.

**Tercero:** Que en lo relativo a la causa principal de nulidad sostenida por la Defensa, se debe precisar por esta Corte, que no hubo afectación de las reglas del debido proceso ni de la presunción de inocencia del acusado, ya que no hubo afectación de sus derechos sustantivos ni adjetivos en el proceso penal, pudiendo actuar válidamente en todo el procedimiento, siendo emplazado al mismo, pudo hacer sus descargos por medio de la asistencia letrada, pudo controlar la legalidad de los antecedentes probatorios, su mérito de acreditación, así como ejercer el derecho a rendir prueba de descargo.

En cuanto al cuestionamiento que la Defensa hace valer sobre el valor probatorio de los elementos de cargo, y en especial, sobre el desconocimiento del origen de la plantación que el acusado planteó en el juicio oral, en que, al decir de la Defensa, tuvo por objeto la protección penal de su madre, se debe dejar asentado que no existieron elementos que desmerecieran el valor de la prueba del Ministerio Público, a que los dichos de los testigos de la Defensa se basaron en cuestiones accesorias, sin haber estado presente al momento del procedimiento policial, que condujo al del hallazgo de la especie vegetales en el domicilio a cargo del acusado, así como tampoco presenciaron los dichos de éste en el inicio de la etapa de investigación, intentando explicar que la presencia de la siembra de las plantas de marihuana, se produjo por personas extrañas al acusado, no obstante los dichos de éste ante Carabineros y coincidente con los hechos constatados por los policías.

Los cuestionamientos que hace la Defensa respecto de los fundamentos que empleó el Tribunal para dar por acreditada la existencia del hecho penal y la participación atribuida al acusado, no guardan relación con el proceso de valoración de los elementos probatorios con los que se logró producir la convicción de condena por los sentenciadores, sea respecto



del tipo, en especial, sobre el conocimiento del tipo de plantación y de la sustancia vegetal, que no guarda relación con los dichos prestados por el acusado en la etapa de investigación, en que reconoció el hecho penal y su autoría, siendo concordante con los demás elementos de prueba recogidos por los policías, los dichos de éstos y la pericia a las que fueron sometidas las sustancias vegetales, por lo que está debidamente acreditado el hecho penal sancionado, así como la participación atribuida al acusado.

En el proceso heurístico y dialéctico llevado a cabo por el Tribunal oral no se percibió la infracción que se alega en el Recurso, ya que los antecedentes probatorios acreditaron que los hechos ocurrieron en el lugar, día y hora que se indicó, que el imputado era morador del inmueble donde se encontraron las plantas de marihuana, la existencia y naturaleza de éstas, los que se estimaron como suficientes para derribar la presunción de inocencia, tratándose de elementos de convicción suficientes al efecto, al tenor de lo dispuesto en el artículo 340 del Código Procesal Penal.

La controversia que levantó el recurrente sobre la fuerza de convicción de los medios probatorios de descargo no introdujeron cuestionamientos que permitieran desacreditar el mérito de la prueba del ente acusador, la que fue suficiente y trascendente para la resolución del conflicto penal y por ende, debe ser desoída la Defensa por la causal en análisis.

Por otra parte, concurre como elemento de desestimación de la motivación anterior, la ausencia del desarrollo de los principios de la lógica que en el Recurso se dijeron violentados, sin que sea suficiente al efecto, su sola invocación como fuente de reproche del análisis judicial.

En consecuencia, el Tribunal Oral pronunció el fallo condenatorio señalando los hechos que fueron acreditados en su parecer, así como el valor de los antecedentes que motivaron la decisión de condena del reo, sin que sea perceptible la presencia de los hechos con que la Defensa cuestionó el ilícito, por el menor valor de la prueba de descargo frente a los elementos inculpativos.

Sobre este último punto, cabe precisar que ante la consagración de la libertad de prueba que establece el artículo 297 del Código Procesal Penal, los antecedentes probatorios deben ser ponderados en términos de la convicción a que se refiere el artículo 340 del Código Procesal Penal, debidamente fundamentada en la prueba rendida en el juicio. Esa obligación aparece satisfecha por el ente jurisdiccional, sin que el reproche



que plantea el recurrente tenga fundamento en el desarrollo del razonamiento de éste.

Por lo anterior, el capítulo de invalidez levantado por la Defensa debe ser desestimado.

**Cuarto:** Que respecto de la causal subsidiaria de invalidez -letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal-, se debe considerar que en el fundamento noveno del fallo en estudio, se fijaron los hechos acreditados en el proceso, que en lo pertinente señaló que en el domicilio del acusado se encontraron “...ocho plantas de una altura entre 50 cm a 2,10 metros aproximados con inflorescencia, de la especie vegetal *cannabis sativa* L,...”, hecho que es inmodificable para esta Corte, según el tenor literal de la causal de invalidación. Asimismo, en el considerando décimo, se fijó la peligrosidad para la salud pública de aquella especie vegetal, siendo además, esa potencialidad un requisito que no es exigible para la configuración del hecho penal, como lo razonó el Tribunal de mérito, en cuanto a que éste se satisface con la sola existencia de la plantación de ese tipo de sustancias vegetales, conclusión que esta Corte hace suya.

En virtud de tales consideraciones, esta causal subsidiaria, por los motivos desarrollados precedentemente, será desestimada.

**Quinto:** Que al segundo motivo subsidiario de nulidad, basado igualmente en la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, se debe tener presente que no obstante que el inciso 2° del artículo 8 de la Ley 20.000 permite la rebaja en un grado de la penalidad asignada al delito que regula en el inciso 1° de la misma norma legal, ella es una facultad entregada a los Tribunales de mérito y se basa tanto en la gravedad del hecho como en las circunstancias personales del acusado, por lo este órgano de casación no puede calificar los fundamentos que tuvo a la vista el Tribunal de fondo, más allá de la valoración que puede hacerse por esta Corte.

Por lo anterior, esa última motivación en que se basa el Recurso, será igualmente desestimada.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 8 y 18 de la Ley 20.000; 297, 342 letra c), 373 letra b) y 374 letra e), 376 y 384 del Código Procesal Penal, ***se rechaza, con costas***, el recurso de nulidad deducido por la Defensa de Fabián Alejandro Pacheco Castro, en contra de la sentencia definitiva de diez de junio de dos mil veintitrés, dictada en la causa R.I.T.



161-2022, R.U.C. 2000104506-8 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares, declarándose que ésta y el juicio oral no son nulos.

Redacción del ministro Carrillo González.

**Regístrese y devuélvase.**

**ROL I. C. 855-2023/PENAL.**

Se deja constancia que no firma el Abogado Integrante don Rodrigo de la Vega Parra, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse ausente.



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministro Carlos Carrillo G. y Fiscal Judicial Oscar Lorca F. Talca, cuatro de agosto de dos mil veintitres.

En Talca, a cuatro de agosto de dos mil veintitres, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>  
Código: BXXBXGSMCGW